El senyor president:

Moltes gràcies, senyor conseller.

Interpel·lació a la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, senyora Elena Cebrián Calvo, sobre les polítiques hídriques de col·laboració amb l'estat previstes per la conselleria en relació amb les dessaladores síties al nostre territori, que formula el diputat senyor Domingo Rojo Sánchez (GP Ciudadanos) (RE número 26.077, BOC número 84)

El senyor president:

A continuació, passem a la següent interpel·lació, que formula el Grup Parlamentari Ciudadanos, a la consellera d'agricultura i medi ambient.

Donem la paraula a l'il·lustre diputat Domingo Rojo que formularà la interpel·lació sobre dessaladores.

Senyor Rojo, quan vosté vullga.

El senyor Rojo Sánchez:

Buenas tardes, señor presidente.

Buenas tardes, señorías.

Buenas tardes, señora *consellera*.

Si me lo permiten, haré una breve radiografía de la situación climática e hídrica de nuestra comunidad.

La Agencia Estatal de Meteorología ha calificado lo que llevamos de año hidrológico de extremadamente seco, sufrimos un déficit hídrico ya del 40% en la comunidad.

Las peores comarcas son: L'Horta Nord, la Vall d'Albaida, la Ribera, la Canal de Navarrés y el litoral sur de Castellón.

Con respecto al estado de las cuencas y sus sistemas de explotación, se encuentran en situación de prealerta la del Turia, Júcar, Vinalopó y el Alacantí. En situación de alerta la Marina Alta y la Marina Baja. Y en situación de emergencia la del Serpis.

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, a fecha de 7 de junio de este año, la provincia de Castellón, con una capacidad de embalse de 221 hectómetros cúbicos tenía embalsados 124 hectómetros, es decir, el 56% de su capacidad. La provincia de Valencia, con una capacidad de embalse de 1.910 hectómetros, tenía embalsados 523, es decir, el 27% de su capacidad. La provincia de Alicante, con una capacidad de embalse de 315, tenía embalsados 127, es decir, el 40% de su capacidad.

Respecto a la reutilización de aguas depuradas, según fuentes de su *conselleria*, en el año 2015, de los 431 hectómetros tratados, solo 255 fueron reutilizados, mientras que 176 terminaron vertidos en el mar. De estos 255 hectómetros reutilizados, 133 se reutilizaron preferentemente en agricultura y una parte marginal en industria. Los 122 restantes reutilizados se reincorporaron al mantenimiento ecológico de los cauces hidráulicos.

Resulta evidente que debemos seguir trabajando en tratamientos terciarios y en una adecuada distribución de rentas, que permitan bombear aguas hacia las comarcas del interior y reducir los vertidos al mar.

Respecto a las aguas trasvasadas, mejor lo dejamos para otro momento, y quiero centrar la interpelación en la producción de agua desalada.

El plan AGUA, impulsado en el año 2004 por el gobierno socialista, suponía la construcción de cincuenta y una plantas desaladoras en el levante y en el sudeste español. En el año 2012 se disponía de diecisiete plantas en explotación y quince en construcción, con una inversión de 2.426 millones de euros. Una parte de ellos fueron financiados con fondos europeos en un porcentaje medio del 20% y con un nivel de producción de aguas desaladas en dicho año, 2012, del 16,45% del total de su capacidad.

En plan concibió estas plantas desaladoras como un sistema de suministro estable y las diseñó en muchos casos sobredimensionadas. La realidad las ha dejado como un sistema de emergencia o garantía de suministro para el abastecimiento humano en situaciones de sequía.

Después de los aeropuertos sin aviones, el fracaso de la Ciudad de la Luz, los desarrollos urbanísticos y turísticos fantasma, llega el turno de las desaladoras al ralentí. Y como toda obra pública que se precie envuelta en sobrecostes, debidos a reformados tras las adjudicaciones.

Varias son las causas que explican la baja utilización de estas plantas: ayuntamientos que durante la burbuja inmobiliaria firmaron convenios con Acuamed para utilizar agua desalada a fin de suministrarla a los enormes desarrollos urbanísticos de zonas áridas o con alto déficit hídrico. Muchos de estos ayuntamientos se comprometieron al coste de explotación y amortización de estas obras durante los próximos veinticinco años y han quedado atrapados en estos convenios, sin los desarrollos urbanísticos, sin capacidad para consumir el volumen de agua desalada comprometida y sin capacidad económica para poder devolver los costes de explotación y amortización asumidos.

Por otra parte, en los años lluviosos las administraciones prefieren usar aguas superficiales o subterráneas por su menor coste.

Y, por último, el coste del agua desalada resulta cara para la agricultura, en torno a 1 euro/metro cúbico, frente a los 0,30 euros/metro cúbico que podría asumir el sector.

El plan AGUA, a través de la empresa pública Acuamed, a partir del año 2005 inició la construcción y ampliación de siete plantas desaladoras en la Comunidad Valenciana. Las plantas construidas son la de Oropesa-Cabanes, Moncófar, en la provincia de Castellón; Sagunto en la provincia de Valencia; Muchamiel, la ampliación de Alicante I, Alicante II y Torrevieja en la provincia de Alicante.

La capacidad de producción máxima de estas plantas ronda los 186 hectómetros cúbicos anuales. La inversión realizada es de 685 millones de euros, de los cuales 196 millones corresponden a la financiación de subvenciones de fondos europeos. Y la población potencial de abastecimiento es de 1.885.000 personas.

Estas eran las previsiones, según las fichas técnicas del ministerio, respecto a las inversiones reales.

Es de todos conocidos los sobrecostes en obras, autorizados por Acuamed, calificado por el ministro del ramo, en aquel momento Arias Cañete, como un festival de los reformados en las adjudicaciones. La desviación media alcanzaba el 24% sobre lo presupuestado en el plan inicial AGUA.

Según datos de Acuamed, la producción de agua desalada en el año 2014 ascendió a 103 hectómetros cúbicos, frente a los 673 de capacidad máxima que se gestionan en las plantas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y parte de Andalucía. Es decir, un 15% de producción sobre la capacidad prevista, o lo que es lo mismo, un conjunto de instalaciones infrautilizadas.

La mayor planta desaladora de Europa, la planta de Torrevieja, está a un nivel de producción del 35%. A fecha de hoy, las plantas desaladoras de Oropesa-Cabanes, Moncófar y Sagunto están finalizadas en su construcción y en su fase de pruebas.

Según noticias de este mismo lunes, Acuamed informó que las desaladoras están en condícenos de producir agua, pero pasan los meses y siguen paradas y no hay previsión que entren en funcionamiento a corto plazo.

Son varias las ocasiones en que la Comisión Europea ha exigido a España que ponga en funcionamiento las desaladoras, tras recordar que han aportado cerca del 20% en subvenciones de fondos europeos para su construcción, siendo una irresponsabilidad del ministerio no poner en funcionamiento y en valor las inversiones realizadas en las plantas desaladoras y a su nivel de producción óptima.

En octubre del 2014, el gobierno del PP proyecta incluir a la fuerza la producción de las desaladoras en los sistemas de abastecimiento, para no tener que hacer frente a las devoluciones de los fondos europeos. Al parecer, sin mucho éxito.

Desde la Comisión Europea han indicado que el límite es el 31 de marzo del 2017. Si en esa fecha no están en uso, la comisión procederá a la recuperación de los fondos.

El pasado 2 de noviembre, en la reunión celebrada entre el presidente del Gobierno de España, don Mariano Rajoy, con el presidente de La Generalitat, don Ximo Puig, el Gobierno de España se comprometió a ampliar la subvención de agua desalada a los regantes de la Comunidad Valenciana, en términos similares al convenio firmado en octubre con el gobierno de la Región de Murcia en base al decreto sequía.

El convenio establece un precio rebajado del agua desalada a 0,30 euros por metro cúbico para los 30 hectómetros de agua producidos en la desaladora de Torrevieja durante el período de octubre de 2015 a septiembre de 2016.

Estas ayudas suponen una subvención real del 70% del precio de venta del agua desalada.

En definitiva, señora *consellera*, dos cuestiones. ¿Nos puede informar en qué estado se encuentra el convenio para la subvención de agua desalada para nuestra Comunidad Valenciana? Y, ¿qué políticas hídricas tiene previstas su *conselleria* en colaboración con el estado en relación a las desaladoras en nuestro territorio?

Gracias.

(Ocupa la presidència el vicepresident segon, senyor Alejandro Font de Mora Turón)

El senyor vicepresident segon:

Gracias, señor Rojo. *(Aplaudiments)*

Té la paraula l'honorable consellera.

La senyora consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural:

Muchas gracias, presidente.

Muchas gracias, señoría.

Mire, en primer lugar, si no estuviésemos en el período político en que estamos con las Cortes Generales disueltas, yo le sugeriría que pidiera a alguno de los diputados o diputadas de su grupo en el Congreso que le hiciesen esta pregunta un poquito modificada al ministerio actual.

La pregunta sería: ¿qué políticas hídricas tiene pensadas el ministerio, en colaboración con la Generalitat valenciana con respecto a la desalación y, en general, a toda la cuestión hídrica? Porque esperamos que a ustedes les hagan más caso, desde luego, que el que nos están haciendo a nosotros, y no será por falta de insistencia de decirles una y otra vez los problemas que tenemos, las cuestiones también constructivas que estamos haciendo para solucionarlo. *(Aplaudiments)*

Porque lo cierto es que la respuesta que encontramos en todos los casos es silencio y falta de información, cuando es cierto que en nuestro territorio tenemos unas instalaciones a punto de funcionar, o en algún caso funcionando, con una tecnología puntera en muchos casos, tecnología de empresas españolas, que además están exportando tecnología, con lo cual parece un contrasentido que no se hagan funcionar al máximo posible, sobre todo porque han estado financiadas con fondos públicos que vienen de nuestros impuestos, de los contribuyentes.

Pero, como usted decía, efectivamente, en la Comunidad Valenciana actualmente solamente se está utilizando entre el 15 y el 20% de la capacidad máxima instalada. Eso en 2015, que ha sido un año excepcional, en el que la planta de Torrevieja se ha puesto a una velocidad de funcionamiento bastante

aceptable con respecto a la situación en que está normalmente. Nosotros nos conformaríamos con llegar al 40% de funcionamiento de esa capacidad máxima, que ya sería bastante.

Por eso, lo estamos exigiendo al ministerio, porque todo ello depende ahora mismo del gobierno central. En primer lugar, que finalicen las inversiones previstas o las conducciones necesarias para la entrada en pleno funcionamiento de las plantas; también que realicen las pruebas de correcto funcionamiento de las plantas que ya están terminadas. Asimismo, también que acaben toda esa negociación de los convenios necesarios para ponerlos en aquellos lugares en que tienen problemas de puesta en marcha.

Pero como ustedes saben, cuando hablamos de infraestructuras, de inversiones del estado, aparte de la situación de infrafinanciación injusta que vivimos, también estamos padeciendo durante todo este tipo una situación de infrainversión en infraestructuras fundamentales para la economía, para la agricultura en nuestro país, entre ellas, las hídricas. Pero, por supuesto, podemos añadir una serie de inversiones de corredor mediterráneo, de transportes, etcétera, que, como decía, son fundamentales para la economía del País Valencià.

En segundo lugar, estamos pidiendo al gobierno central que trabaje sobre todas aquellas opciones de eficiencia energética, de optimización y aumento de caudales que permitan, por un lado, abaratar el agua destinada a la agricultura y, por otro lado también, avanzar hacia formas de producción sostenibles y una economía baja en carbono, que es lo que nos está diciendo la Estrategia Europa 2020.

Porque es cierto que la producción de agua desalada es una gran consumidora de energía, pero también es cierto que es un tipo de instalaciones donde hay una amplísimo margen de uso energía renovables. Y es preciso señalar aquí que en el binomio energías renovables y agua es el presente y es el futuro, y quien se niegue a aceptar esto, como ha estado haciendo el gobierno del señor Rajoy durante muchos años, está cometiendo un gravísimo error.

Y cuando nosotros insistimos en el uso de renovables, en combinar ese binomio, es a lo que nos referimos cuando decimos que hay que tomar un liderazgo dentro de España, dentro de Europa en la lucha contra el cambio climático.

Estas son cuestiones concretas que se pueden hacer y que se pueden hacer con voluntad política, que hasta el momento no hemos percibido.

En tercer lugar, es preciso detenerse por las necesidades hídricas de la zona, por la envergadura de la planta y también por la magnitud de la inversión realizada en la planta de Torrevieja, que además, desgraciadamente, ahora se encuentra inmersa en un caso de investigación judicial por el lamentable caso de Acuamed.

Efectivamente, el pasado febrero pedimos al Gobierno de España que realizara todos los trámites técnicos y administrativos necesarios para que la planta pudiera rendir al máximo, porque actualmente está solamente produciendo al 35% de su capacidad. Como decía, el 2015, que ha sido un año con una producción razonable, se ha alcanzado solamente 11,5 hectómetros cúbicos.

Básicamente se trataría de incrementar la potencia eléctrica de la planta, con lo que se podrían aportar 60 hectómetros cúbicos adicionales a la provincia de Alicante, lo cual es muy necesario que se ponga en marcha lo antes posible.

En cuanto al coste, efectivamente, usted ha recordado bien que en septiembre, el señor Rajoy se comprometió solamente con el gobierno de Murcia, insisto, solamente con el gobierno de Murcia, a hacer lo que fuera necesario para abaratar el agua desalada para los regantes murcianos. Tuvimos que estar allí, yo misma, en el ministerio, ante la ministra, para decirle que recordara que la situación de sequía en la cuenca del Segura afectaba también a Alicante. Así es como el gobierno central de Mariano Rajoy pretende defender a la Comunidad Valenciana, olvidándose de Alicante y de los regantes de Alicante.

Por eso, en la misma línea hemos vuelto a insistir, le hemos vuelto a insistir a la ministra, al gobierno, pero de nuevo ¿qué hemos recibido? Inacción y silencio. Eso es lo que puedo decir. Estamos esperando a que el gobierno actúe, pero lo que parece es que vamos a tener que esperar a que el gobierno cambie.

Porque, desde luego, si el estado impulsara mínimamente el funcionamiento de la planta de Torrevieja, ampliaría mucho el margen con esos sesenta hectómetros cúbicos adicionales que, por cierto, están previstos en la planificación hidrológica del Segura, una planificación que ha aprobado el gobierno y que está enviada a Bruselas, ahí están previstos.

Con ello, podríamos hacer frente, en caso de necesidades por etapas extremadamente secas, no solo aquí, sino también en los pantanos de cabecera del trasvase Tajo-Segura. Pero también podríamos hacer frente a los incrementos de población estacionales por el turismo.

Por último, insistimos que nuestra política es combinar el agua desalada, es un complemento al resto de fuentes convencionales; también a la reutilización, como usted ha señalado.

El error está en plantear la dicotomía. Una de las polémicas más absurdas que se han vivido en la Comunitat Valenciana ha sido cuando se demonizaba el agua desalada, todo para justificar los trasvases. Son complementarios. Tiene que tenerse una visión de conjunto en la gestión de recursos hídricos y también una visión de futuro, porque la desalación ya no solo puede verse como una solución temporal, tiene que ser una solución para el futuro. También por una cuestión fundamental: por la tremenda vulnerabilidad de nuestro territorio al cambio climático y, sobre todo, a los períodos de escasez, de sequías, a los períodos de mayor escasez de recursos hídricos a los que nos enfrentamos.

Nos lo han vuelto a recordar el pasado 8 o 9 de junio, cuando celebrábamos el veinticinco aniversario del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. La Comunidad Valenciana se enfrenta a períodos de escasez, de sequía, todavía más graves. Por ello, creemos que sería una irresponsabilidad no incorporar esos escenarios de presente y de futuro en nuestra política de agua. Y, en ellos, la desalación es parte de la solución.

Aprovechando esta ocasión, también les anuncio, les informo que la asociación española de desalación y reutilización va

a celebrar su congreso anual en Valencia el próximo mes de octubre, 2016. Es bastante llamativo pensar que por primera vez se celebra en la Comunidad Valenciana. Por primera vez se celebra en Valencia un congreso sobre desalación y reutilización. Es más que paradójico, quizás porque en otros momentos ni se les apoyaba, ni siquiera se les permitía que celebrasen un congreso de ese tipo. *(Aplaudiments)*

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, consellera.

Senyor Rojo, per a completar la seua interpel·lació, té vosté la paraula.

El senyor Rojo Sánchez:

Buenas tardes nuevamente, señora *consellera*.

Resulta evidente que la Comunidad Valenciana sufre estrés hídrico, con mayor o menor severidad, por sus condiciones climatológicas.

Es igualmente evidente que, dentro del contexto global del cambio climático, estas condiciones climatológicas e hídricas se mantendrán en las próximas décadas.

En Ciudadanos queremos impulsar un nuevo plan hidrológico nacional. Pero, hasta que llegue ese momento, somos conscientes de que la Comunidad Valenciana debe intentar ser autosuficiente, desde el punto de vista hídrico, respecto a su abastecimiento.

Este abastecimiento debe ser fruto de un *mix* de recursos hídricos convencionales –es decir, aguas de superficie, aguas subterráneas y aguas trasvasadas– y de recursos no convencionales –aguas reutilizadas y aguas desaladas.

Somos conscientes, señora *consellera*, que la puesta en producción a un nivel óptimo de capacidad de las plantas desaladoras de esta comunidad es responsabilidad del Gobierno de España, a través de la empresa pública Acuamed. Pero sería una grave irresponsabilidad por parte de todos nosotros no denunciar la irresponsabilidad por parte de Acuamed de no poner en producción las plantas de Moncófar, Oropesa-Cabanes y Sagunto, habiendo hecho una inversión conjunta de 145 millones de euros, de los cuales 46 corresponden a fondos europeos que, como hemos comentado anteriormente, si a 31 de marzo de 2017 no están en producción, deberá devolver el Gobierno de España.

La irresponsabilidad del Gobierno de España al planificar unas inversiones en plantas desaladoras basadas en futuros desarrollos urbanísticos que, como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, los han dejado sin demanda.

La irresponsabilidad, por no haber revisado en 2008, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la planificación y la reevaluación de las necesidades hídricas reales.

La irresponsabilidad de atrapar ayuntamientos en unos convenios inasumibles, sin desarrollos urbanísticos y sin capacidad para consumir el volumen de agua desalada comprometida y sin capacidad, por los ayuntamientos, para poder devolver los costes de explotación y amortización en las cuantías y plazos establecidos.

La irresponsabilidad por la no puesta en producción supone una pérdida de inversión pagada con dinero público y convertir estas instalaciones en un montón de chatarra obsoleto en un breve período de tiempo.

Señora *consellera*, aunque es cierto que no ha sido usted ni su *conselleria* quienes han generado toda esta situación, en este momento sí son ustedes las personas responsables de arbitrar soluciones y exigir su ejecución, por muy complejo que resulte el problema planteado.

Desde el Grupo Ciudadanos, entendemos que hay que ir más allá de la crítica o de la queja. Y, desde una posición comprometida con la necesidad de abordar este tema, le presentaremos una moción en la que aportaremos un conjunto de medidas, una especie de hoja de ruta, cuya consideración y aplicación pensamos que resultará útil y eficaz.

Muchas gracias. *(Aplaudiments)*

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyor Rojo.

Per a finalitzar esta interpel·lació, l'honorable consellera té la paraula.

La senyora consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural:

Sí, muchas gracias.

Y recojo sus palabras y las agradezco, porque son siempre desde la crítica constructiva. Y es cierto que nos hace mucha falta también el apoyo de esta cámara en todas las exigencias que tenemos que hacer al gobierno actualmente en funciones –o sin funcionar– que tenemos, y que esperemos que cambie en breve.

Por eso, sí, continuaremos, independientemente también, exigiendo una solución a estas cuestiones porque creemos en que, como usted señalaba, la combinación de recursos hídricos, subterráneos y superficiales, siguiendo el principio de unidad de gestión, también, que marca la directiva marco de agua, también la combinación de recursos convencionales y no convencionales, como decíamos, de depuración, de desalación también... Creemos que esa es la solución, que es la visión de futuro.

Me alegra y nos felicitamos, estoy segura, todos nosotros, mucho, en pensar que nuestro objetivo tiene que ser y tenemos que ir, puesto que es una cuestión estratégica de territorio, a la autosuficiencia en recursos hídricos. Y ahí tenemos que hacer una gestión inteligente de lo que tenemos.

Tenemos que contar con el diálogo, con la participación. Y ahí creemos que se puede lograr, trabajando mucho, desde luego, en la gestión y cambiando el foco de las políticas,

pasando no tanto de la gestión de la oferta, es decir del conseguir el recurso, porque en muchos casos, y lamentablemente, en el pasado, en este gobierno, en la Generalitat valenciana, en el gobierno del Partido Popular, lo que se hizo es incrementar toda esa burbuja inmobiliaria, generar una expectativas irracionales que llevaban a tener que responder después a una demanda de recursos hídricos desorbitada. Y ese foco en la gestión de la oferta tiene que pasar a la gestión de la demanda del recurso hídrico.

Es decir, tenemos que hablar de eficiencia, tenemos que hablar de ahorro, tenemos que hablar de ajustar las demandas, de una mejor gestión también del agua en el regadío, de una adaptación de los cultivos al regadío, de una aplicación –porque es un margen de aplicación tremendo y poco explotado– de toda la innovación y la tecnología que hay alrededor de un mejor uso del agua y que tenemos obligación, por responsabilidad, de hacerlo.

Y todo eso, desde luego, que se relaciona con ese modelo de territorio depredador, de un urbanismo descontrolado, que ha llevado a situaciones paradójicas y muy problemáticas para los ayuntamientos que ahora tienen que gestionarlas, como la que usted estaba comentando de Moncófar, Oropesa y Sagunto.

Ahí ya hemos empezado a hacer cosas. Ya hemos empezado este Consell a trabajar en la reversión, en la recuperación de todo ese terreno declarado como urbanizable y que nunca lo va a ser. Y tenemos que llegar… Ahí también insistiremos a Acuamed que haga…, ha tenido cuatro años también de tiempo para hacerlo, si hubieran querido, pero, como decía, aquí hemos apreciado, desde el Consell, pues, que ha habido muy poca voluntad política de poner soluciones a los problemas de este…, del País Valencià.

Muchas gracias. *(Aplaudiments)*

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies.

Moltes gràcies, senyora consellera.

Interpel·lació al conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, senyor Rafael Climent González, sobre la política general del Consell pel que fa a les actuacions pròpies en matèria de sòl industrial i, especialment, referent a l'habilitació actual i futura de sòl públic per a la implantació d'activitats industrials i per a plataformes logístiques, amb detall dels parcs empresarials actuals i futurs, les zones d'ubicació, la superfície total, l'equipament bàsic previst en cadascuna d'elles i les condicions de comercialització, que formula el diputat senyor José Francisco Almería Serrano (GP Podemos-Podem) (RE número 20.584, BOC número 69)

El senyor vicepresident segon:

Passem al punt últim del dia de hui, que és la interpel·lació al conseller d'economia, que formula el diputat José Francisco Almería, del Grup Parlamentari Podemos-Podem, que té la paraula.

El senyor Almería Serrano:

Moltes gràcies, president.

Conseller Climent.

Consellera.

Senyories que encara romanen, estoicament, als seus escons.

Crec que a totes les persones que hem sigut proclius i bons receptors de consells en la nostra vida ens han dit en alguna ocasió que la casa no ha de començar-se per la teulada. Per la qual cosa, lògicament, concloíem que havíem de començar-la pel sòl.

Si parlem de reindustrialització, creixement empresarial i desenvolupament econòmic, parlar de començar pel sòl potser seria com dir que hem de començar a debatre sobre el tema de sòl industrial, base de qualsevol estratègia d'industrialització.

Benvolgut conseller, en la seua primera compareixença com a membre del Consell en aquesta cambra, el 23 de setembre de 2015, per a informar sobre les línies generals de la política que anava a dur a terme la seua conselleria en aquesta legislatura, no va fer cap menció al voltant d'aquest tema, la qual cosa, inicialment, ens va començar a preocupar.

No obstant, la nostra expectativa va estar resolta, en principi, perquè un poc més endavant, el Ple de Les Corts, en sessió de 17 de febrer de 2016, debatia i aprovava una proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre la gestió dels parcs empresarials per a fomentar l'activitat industrial de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i, curiosament, esmenada pel Grup Parlamentari Compromís. Proposició que està publicada en la Resolució 133/IX, i en què les Corts Valencianes instaven el Consell a elaborar un projecte de llei d'àrees empresarials que tinguera en compte un detallat i ambiciós nombre de punts, que més aviat ja semblava el mateix esquelet de la futura norma que no una PNL a l'ús, quan, en altres ocasions, i des del mateix Grup Socialista, doncs, se'ns ha criticat en altres proposicions, concretament, un elevat grau de detall per les propostes de resolució.

Des de l'inici d'aquest plantejament, ens va semblar d'extrema curiositat que, des dels dos grups parlamentaris que sustenten de forma primigènia el Consell, un d'ells presentara un PNL per a instar el Consell a elaborar un projecte de llei i que, a més a més, aquesta PNL fóra esmenada per l'altre grup parlamentari soci de govern. ¿Per què no presentar, directament, el projecte de llei? Però són principiants –perdonen vostés– en la dinàmica parlamentària i han volgut ser prudents i esperar esdeveniments al final del termini que la PNL donava per a rendir comptes del compliment de la resolució.

Al punt 13 de l'esmentada resolució, i com és habitual en aquest tipus de propostes, s'instava el Consell a retre comptes a Les Corts sobre el seu compliment, com a màxim als quatre mesos des de la seua aprovació.